

De la promesa democrática a la autocratización: América del Sur en el tránsito del siglo XX al XXI

From democratic promise to autocratization: South America in the transition from the 20th to the 21st century

Alejandro Enrique Rodríguez Becerra

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Alejandro67721@hotmail.com

37

Resumen: Este ensayo analiza el proceso de autocratización de los sistemas democráticos en América del Sur durante la transición del siglo XX al XXI. Se argumenta que este deterioro no es resultado de una ruptura repentina, sino de una erosión gradual que se origina en el seno de las propias instituciones. A partir de un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y un diseño de historia cultural, este análisis documental indaga cómo la crisis democrática de finales del siglo XX —marcada por el desencanto ciudadano y la debilidad estructural del Estado— fue instrumentalizada por liderazgos autocráticos. Estos líderes, a través de una conducción delegativa y de narrativas de refundación y restauración nacional, consolidaron su poder y reconfiguraron el entramado institucional, dando lugar a regímenes híbridos. El ensayo revela que, en estos modelos, el carisma personal y el malestar social desplazaron los principios de la separación de poderes y el pluralismo, estableciendo una lógica de representación vertical y emocional. Este estudio aporta al debate sobre la crisis democrática contemporánea al demostrar cómo las democracias sudamericanas fueron gradualmente desplazadas por formas de democracias delegativas híbridas, inscritas en las dinámicas del autoritarismo competitivo.

Palabras clave: autocratización, democracia, autoritarismo competitivo, democracia delegativa híbrida, crisis de legitimidad.



Abstract: This essay examines the autocratization of democratic systems in South America during the transition from the twentieth to the twenty-first century. It contends that this deterioration did not stem from abrupt ruptures, but rather from a gradual erosion rooted within the institutional core itself. Through an interpretive paradigm, a qualitative methodology, and a cultural-historical framework, the documentary analysis explores how the democratic crisis of the late twentieth century—characterized by widespread civic disillusionment and the structural fragility of the state—was strategically leveraged by autocratic leaders. These figures, employing delegative governance and invoking narratives of national refoundation and restoration, consolidated their authority and restructured institutional frameworks, giving rise to hybrid regimes. The essay demonstrates that in these models, personal charisma and social unrest displaced foundational principles such as the separation of powers and political pluralism, establishing a vertical and emotionally charged logic of representation. Ultimately, this study contributes to the broader debate on contemporary democratic decline by revealing how South American democracies were progressively supplanted by hybrid forms of delegative democracy, embedded within the dynamics of competitive authoritarianism.

Keywords: autocratization, democracy, competitive authoritarianism, hybrid delegative democracy, crisis of legitimacy

38

Introducción

La transición a la democracia en América del Sur, tras el ocaso de los regímenes autocráticos en la segunda mitad del siglo XX, fue celebrada como el inicio de una era de estabilidad y justicia social. Sin embargo, esa promesa se vio rápidamente eclipsada por el desencanto ciudadano, el debilitamiento institucional y el resurgimiento de prácticas arbitrarias. Este fenómeno, lejos de representar una regresión directa a los modelos despóticos del pasado, ha dado lugar a configuraciones políticas que combinan mecanismos electorales con lógicas de concentración de poder, articulando democracias delegativas híbridas inscritas en dinámicas de autoritarismo competitivo.



En este contexto, el presente ensayo se propone analizar la autocratización de los sistemas democráticos en América del Sur durante la transición del siglo XX al XXI. La investigación, bajo un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y un diseño de historia cultural, se centra en los imaginarios colectivos que han moldeado la cultura política sudamericana. Para ello, se realiza un análisis documental de fuentes primarias — discursos presidenciales, prensa escrita y expresiones artísticas— que permiten rastrear las huellas simbólicas del poder en contextos democráticos en proceso de erosión.

El ensayo se estructura en tres capítulos. El primero, La sombra del autoritarismo: desentrañando su avance en las sociedades democráticas, presenta una aproximación a las nociones de democracia, regímenes híbridos y erosión democrática. El segundo, La transición democrática en América del Sur: de la movilización a la frustración, profundiza en la transición post-autocrática y la consolidación de democracias imperfectas de tipo delegativo. Finalmente, el tercer capítulo, El quiebre democrático en América del Sur: narrativas, carisma, refundación y restauración, examina las tácticas discursivas, simbólicas y políticas de Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Álvaro Uribe y Alberto Fujimori.

39

La sombra del autoritarismo: desentrañando su avance en las sociedades democráticas

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por profundas transformaciones políticas, con dos hitos que marcaron su rumbo: el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la caída del Muro de Berlín (1989). Ambos acontecimientos simbolizaron un rechazo global a los regímenes totalitarios —nazismo, fascismo, comunismo— y alentaron la esperanza de construir sistemas más justos e inclusivos. Este espíritu renovador impulsó múltiples transiciones democráticas, especialmente en Europa del Este y América Latina.



El auge de estas transiciones atrajo un intenso interés de politólogos e historiadores, quienes las analizaron desde diversas perspectivas. Giovanni Sartori , con un enfoque comparado, subrayó su propagación como un hecho indiscutible. Samuel Huntington , desde una perspectiva histórica, identificó olas sucesivas de democratización. Francis Fukuyama , con una visión teleológica, argumentó que representaban el «fin de la historia», es decir, el punto culminante de la evolución ideológica de la humanidad.

No obstante, mientras un consenso académico se consolidaba sobre la aparente linealidad del avance democrático, surgió un debate crucial: la necesidad de construir instituciones capaces de limitar la concentración del poder y prevenir la perpetuación de liderazgos —incluso aquellos respaldados por mayorías populares— dentro de un sistema que presupone ciudadanos dotados de madurez intelectual y ética cívica. Teóricos como Karl Popper y Norberto Bobbio ofrecieron una perspectiva fundamental, enfatizando que la consolidación de una democracia no solo depende de la estructura de gobierno, sino de la edificación de una sociedad democrática, basada en la complejidad del pensamiento humano. Esto implica la creación de instituciones que promuevan el diálogo abierto, la tolerancia y la pluralidad de ideas, trascendiendo la simplista dicotomía entre izquierda y derecha.

40

Profundizando en este planteamiento, Robert Dahl conceptualizó la poliarquía como el modelo ideal de democracia. En este modelo, el poder se distribuye entre múltiples grupos que compiten de manera efectiva, garantizando la participación ciudadana a través del sufragio universal, la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación. Diversos académicos —entre los que destacan Huntington, Philippe Schmitter, Terry Karl, Domingo Irwin, Scott Mainwaring, Aníbal Pérez, Seymour Lipset, David Beetham y Kevin Boyle— enriquecieron esta concepción, señalando como pilares de la democracia: las elecciones competitivas ; la autonomía de las decisiones políticas frente a la influencia de élites no electas —como grandes poderes económicos, religiosos o agentes externos que comprometan la independencia nacional —; el control civil sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ; la ausencia de influencia de grupos armados en la política gubernamental ; una sociedad civil activa ; y medios de comunicación independientes .



Sin embargo, los principios de la poliarquía enfrentan nuevas tensiones en el siglo XXI. La posmodernidad, los movimientos contraculturales y la revolución digital han reconfigurado los marcos de inclusión, deliberación y legitimidad institucional. Si bien estos procesos han ampliado el espectro de derechos y visibilizado demandas de grupos históricamente excluidos—como la lucha de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queer y más (LGTBIQ+) por el reconocimiento del matrimonio igualitario— también han propiciado dinámicas que erosionan la deliberación racional y socavan los fundamentos democráticos.

Uno de los desafíos más significativos es el fenómeno de la posverdad, en el cual las emociones y las creencias personales adquieren mayor peso que los hechos verificables en la configuración de la opinión pública. La posmodernidad, al relativizar la noción de verdad objetiva, ha facilitado su emergencia, intensificada por las redes sociales. En estos entornos, los algoritmos de personalización refuerzan sesgos cognitivos preexistentes, creando «cámaras de eco» que fragmentan a la sociedad en grupos con visiones de la realidad divergentes. Como resultado, el debate público se torna predominantemente emocional, dificultando tanto la deliberación racional como la toma de decisiones informadas.

41

En este contexto de fragmentación simbólica, se ha intensificado una disputa sociocultural en torno a la definición y representación de las identidades colectivas e individuales, especialmente aquellas vinculadas al género y la etnicidad. La legitimidad de estas identidades se convierte en objeto de controversia en los espacios institucionales y mediáticos, revelando tensiones profundas entre dinámicas de inclusión y exclusión.

Ante este escenario, Sartori reafirma la necesidad de que las instituciones que conforman la sociedad democrática poliárquica superen la polarización ideológica simplista. Para abordar eficazmente estas nuevas complejidades, es imprescindible reconocer la naturaleza multifacética del pensamiento humano y la riqueza de la diversidad cultural. En sintonía con este planteamiento, Chantal Mouffe profundiza en la idea de que la pluralidad cultural configura una estructura agonística. A diferencia del antagonismo, que busca la eliminación del otro, el agonismo implica reconocer al oponente



como un adversario legítimo, con quien es posible dialogar y alcanzar acuerdos sin recurrir a su exclusión.

No obstante, la posibilidad de construir consensos se ve amenazada por la creciente polarización social que acompaña la disputa por la representación de las identidades, intensificada por la denominada «batalla cultural». Esta confrontación ideológica busca imponer valores, normas y creencias particulares, con el objetivo de controlar la capacidad de la sociedad para decidir sobre los elementos que le permiten satisfacer sus necesidades, ya sean materiales, organizativas, simbólicas o cognitivas.

Una estrategia fundamental en esta contienda, identificada por Fukuyama , es la política del resentimiento. Esta táctica, empleada por líderes políticos para movilizar a las masas, se basa en la manipulación de sentimientos de ofensa y humillación. El nacionalismo conservador y el globalismo progresista, aunque superficialmente opuestos, representan dos manifestaciones de esta misma estrategia, ya que ambas recurren a un discurso polarizador para consolidar el poder de un grupo.

42

El nacionalismo conservador, según Guy Sorman , representa el resurgimiento de ideas como el nacionalismo agresivo, la xenofobia y el autarquismo económico. Un ejemplo de esta tendencia se observa en el presidente argentino Javier Milei (desde 2023), quien, en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Brasil, articuló un discurso que genera un resentimiento colectivo al afirmar que «es falso que la izquierda sea la ideología de los pobres y los oprimidos», y que es, en cambio, «la ideología de los ricos, los poderosos que controlan y tienen posiciones prominentes en la difusión cultural».

Por su parte, el globalismo progresista, según Agustín Laje , busca llevar adelante una transformación social a gran escala. Esta tendencia intenta deconstruir identidades nacionales, culturales, religiosas y sexuales para fomentar una identidad global homogénea, presentada como inclusiva y emancipadora. Esta concepción se refleja en las palabras expresadas por el expresidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Barack Obama (2009-2017), quien, en un discurso de apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris, señaló:



En parte me hace pensar -y me dirijo directamente a los hombres (negros)- que simplemente no les gusta la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les ocurren otras alternativas y otras razones para ello. ¿Estás pensando en no participar o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarte, porque crees que eso es un signo de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? No es aceptable.

Los discursos de líderes como Milei y Obama, aunque ubicados en extremos opuestos del espectro político, comparten una lógica de construcción identitaria que opone un «nosotros» a un «ellos». Esta polarización discursiva, al simplificar la complejidad social en categorías excluyentes, crea las condiciones para el surgimiento de los denominados regímenes híbridos. Según Larry Diamond, estos sistemas combinan elementos del autoritarismo y de la democracia, adaptándose estratégicamente para perpetuar el poder de una élite gobernante.

Dentro de esta categoría, Steven Levitsky y Lucan Way identifican el autoritarismo competitivo, caracterizado por la celebración de elecciones periódicas que, aunque formalmente válidas, se desarrollan en un contexto profundamente desigual y vulnerable a la manipulación sistemática. El grupo gobernante utiliza diversas tácticas para mantener su hegemonía, incluyendo el control casi absoluto de los medios, la intimidación a la oposición y la alteración estratégica de las normas electorales. Aunque existe una oposición legal, las desventajas estructurales que enfrenta limitan sus posibilidades reales de alcanzar el poder.

Un ejemplo ilustrativo de autoritarismo competitivo es la democracia iliberal implementada por Recep Tayyip Erdoğan en Turquía desde 2014. Tal como la plantea Fareed Zakaria, este modelo se distingue por el control gubernamental de una proporción significativa de los medios de comunicación, la sistemática intimidación de periodistas y actores opositores, así como la distribución parcializada de recursos Estatales. Estas prácticas recurrentes erosionan la transparencia de los procesos electorales, restringen la pluralidad política y socavan las libertades civiles esenciales. Aunque se mantiene la existencia formal de múltiples partidos, estos operan en un entorno profundamente adverso, carente de garantías mínimas para ejercer una oposición efectiva.



Otra variante de los regímenes híbridos es el autoritarismo hegemónico. De acuerdo con Inmaculada Szmolka Vida, este se caracteriza por la preeminencia de un partido o un líder que ejerce el poder de manera casi exclusiva. Formalmente, se permite la existencia de otros partidos, pero estos desempeñan un rol marginal y no representan una amenaza real para la élite dominante. El grupo hegemónico utiliza su control sobre el Estado y sus recursos para perpetuarse, restringiendo la competencia política y las libertades mediante la instrumentalización selectiva del Estado de derecho. Este se emplea para perseguir opositores a través de leyes restrictivas y un sistema judicial politizado y carente de independencia.

Un ejemplo de esta variante es el régimen hegemónico autoritario que Vladimir Putin ha consolidado en Rusia desde el año 2000. Para Diamond, este modelo se distingue por la instrumentalización de las elecciones como un mecanismo de legitimación formal, mientras se debilita sistemáticamente la competencia justa y la rendición de cuentas. Esto se logra mediante un amplio abanico de estrategias: control férreo de los medios, manipulación del sistema judicial, represión de la sociedad civil y uso de la corrupción como herramienta de control político. Adicionalmente, se promueve un culto a la personalidad en torno al líder, presentándolo como garante indispensable de la estabilidad y la grandeza nacional.

44

La irrupción de los regímenes híbridos en el siglo XXI nos obliga a repensar no solo el funcionamiento de la democracia, sino también la naturaleza de las autocracias. Sergei Guriev y Daniel Treisman advierten que estas han abandonado el terror espectacular, sustituyéndolo por mecanismos más sutiles, donde el miedo se insinúa sin necesidad de ser explícito. La represión ahora se disfraza bajo formas de coerción judicial, vigilancia encubierta, amenazas implícitas y accidentes cuidadosamente orquestados. Guriev lo vivió en carne propia en 2013, tras denunciar la persecución judicial contra Mijaíl Jodorkovski —magnate petrolero condenado por evasión fiscal y lavado de dinero—. Fue entonces objeto de interrogatorios, presiones institucionales y vigilancia sistemática por parte de las autoridades rusas, lo que finalmente lo obligó al exilio.



Este tipo de represión encubierta pone en evidencia que la clásica dicotomía entre totalitarismo y democracia resulta insuficiente para captar la complejidad y capacidad de adaptación de estos regímenes. La limitación conceptual se ha visto reforzada, en parte, por la visión optimista y lineal del progreso democrático que predominó entre los académicos de finales del siglo XX. Asimismo, el enfoque tradicional de los derechos humanos, a menudo exacerbado por la política del resentimiento, ha tendido a centrar el análisis de las autocracias en las violaciones masivas y flagrantes. Priorizar el estudio de casos extremos como la limpieza étnica de los Balcanes (1992-1995) o el trato cruel que infligieron los talibanes a las mujeres en Afganistán (1996-2001) ha eclipsado la comprensión de cómo se han establecido formas más sofisticadas de dominación, capaces de operar bajo apariencias democráticas y con legitimidad discursiva.

En estos sistemas, como señalan Mainwaring y Pérez-Liñán, se han empleado estrategias sistemáticas para erosionar gradualmente las instituciones, explotando tensiones inherentes a cualquier democracia, como la necesidad de conciliar la eficiencia en la gestión de los asuntos públicos con la legitimidad que otorga el consentimiento ciudadano. A través de discursos heroicos y manipulaciones emocionales, sus dirigentes exacerbaban divisiones sociales y socavan el sistema democrático. Esta narrativa, por ejemplo, se observa en Erdoğan, quien, a través de alocuciones como la pronunciada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024, ha logrado persuadir a la ciudadanía turca para que legitime electoralmente la represión de la oposición, el control de los medios de comunicación y la manipulación del sistema judicial

45

En un momento crítico para nuestra nación, cuando la democracia estaba en peligro debido a la corrupción desenfrenada, la inestabilidad política y las amenazas externas, Turquía se levantó y defendió sus valores fundamentales. Bajo mi liderazgo, hemos implementado reformas que han fortalecido nuestras instituciones democráticas y garantizado que la voz de cada ciudadano sea escuchada.

Distinguir entre líderes políticos que instrumentalizan el resentimiento para obtener réditos electorales y aquellos que buscan consolidar un poder autocrático constituye un desafío complejo. Aunque identificar las diferencias entre un discurso polarizador y uno



heroico puede ofrecer pistas notables, este criterio resulta insuficiente para una identificación rigurosa. En este sentido, es especialmente útil incorporar el enfoque propuesto por Anna Lührmann y Staffan Lindberg, quienes conceptualizan la erosión democrática no como una ruptura abrupta, sino como una autocratización: una transformación deliberada y gradual orientada a instaurar una autocracia de nueva generación. Este proceso se despliega en tres etapas, claramente observables en el caso de Hungría bajo el liderazgo de Viktor Orbán, quien desde 2010 ha promovido lo que él mismo reconoce como una democracia iliberal.

La primera etapa, la recesión democrática, se caracteriza por el debilitamiento paulatino de las instituciones y un aumento significativo de la polarización social. En Hungría, Orbán ha utilizado un discurso nacionalista que apela a la nostalgia y presenta a la sociedad húngara como víctima de fuerzas externas. Un ejemplo elocuente de esta estrategia es su discurso conmemorativo de la Revolución de 1956, donde afirmó: «Las fuerzas del globalismo están tratando de abrir nuestras puertas a la fuerza y están trabajando para convertirnos a los húngaros en Homo brusselius».

46

En la siguiente fase, la ruptura democrática, ocurre un quiebre más abrupto y decisivo del orden democrático. El líder híbrido aprovecha debilidades institucionales o crisis coyunturales para centralizar el poder y dismantelar los mecanismos de control. Orbán consumó esta ruptura mediante la reforma constitucional de 2011, aprobada sin consenso plural, que otorgó al Ejecutivo facultades excepcionales para intervenir en el Poder Judicial y controlar el ecosistema mediático. La creación del Consejo de Medios —integrado por figuras afines al régimen— institucionalizó la censura y homogeneizó el discurso público. Paralelamente, la adquisición de medios por empresarios aliados deterioró el pluralismo informativo, mientras que la ofensiva contra la sociedad civil generó un clima de autocensura. El caso de Lajos Simicska, ex aliado de Orbán, ilustra esta dinámica: tras convertirse en opositor abierto, fue presionado a ceder su conglomerado mediático y exiliarse, convirtiéndose en símbolo del costo político de la disidencia.

En la fase final, la consolidación autocrática, el régimen autocrático se institucionaliza y legitima. Se establecen nuevas normas que restringen libertades



fundamentales y consolidan el poder del líder de forma estructural y permanente. En Hungría, este proceso se evidencia en la manipulación del sistema electoral. Un ejemplo revelador es el rediseño de los distritos electorales en 2014, orientado a favorecer a la Unión Cívica Húngara (Fidesz). Esta ingeniería electoral permitió que, en las elecciones de 2022, el partido obtuviera una victoria desproporcionada: pese a que las encuestas le otorgaban una ventaja de apenas cinco puntos sobre una oposición unificada, el Fidesz logró un margen de veinte puntos y aseguró el control del 83% de los distritos parlamentarios.

El tránsito de Hungría hacia un autoritarismo competitivo no ha constituido únicamente una mutación política, sino una transformación cultural. Este proceso, alimentado por la polarización y la manipulación emocional, pone en evidencia el papel decisivo de la cultura política—entendida como el conjunto de valores, creencias y actitudes que otorgan sentido a la vida pública—en la configuración de los sistemas de gobierno.

La sociedad húngara ha experimentado un desplazamiento desde una cultura participativa, en la que los ciudadanos se involucraban activamente en los asuntos públicos, hacia una de súbdito participante. En este nuevo escenario, el gobierno habilita formas de participación que están cuidadosamente controladas, lo que deteriora la confianza institucional, facilita la censura y restringe el accionar autónomo de la sociedad civil.

Este giro cultural se vincula estrechamente con los hábitos, aquellos esquemas internalizados que Pierre Bourdieu definió como moldeadores de las percepciones y prácticas sociales. Los hábitos, producto de experiencias históricas, pueden entrar en tensión con nuevos valores en contextos de cambio social. En el caso húngaro, la memoria de un pasado comunista ha generado un hábito de desconfianza hacia las élites liberales y la injerencia extranjera. Esta desconfianza ha sido instrumentalizada por Orbán para legitimar políticas nacionalistas y concentrar el poder.

En este marco, el poder político no emerge como una entidad fija, sino como una relación dinámica de fuerzas en constante reconfiguración. Los actores sociales participan activamente en la producción, reinterpretación y transformación de los significados



asociados al poder, generando tensiones y contradicciones que pueden desestabilizar el orden político establecido mediante procesos de movilización social.

Un ejemplo histórico de esta capacidad de contrapoder es la Revolución Húngara de 1956, iniciada por estudiantes y trabajadores. A través de huelgas y la creación de consejos revolucionarios, la insurrección logró constituir, aunque de forma efímera, una estructura de poder paralela al Estado comunista. Hoy, las movilizaciones de la sociedad húngara contra leyes que restringen la autonomía universitaria y los derechos LGTBIQ+ son expresiones contemporáneas de esa misma pulsión emancipadora.

En síntesis, el siglo XXI ha evidenciado la fragilidad de las democracias, expuestas a formas de autoritarismo que operan desde dentro del sistema. La erosión institucional, la polarización y la manipulación emocional no solo desafían los mecanismos formales, sino que interpelan la cultura política que los sostiene. Esta crisis, sin embargo, abre una oportunidad crucial: reconstruir una ciudadanía crítica capaz de disputar el sentido del poder, resistir su captura simbólica y revitalizar el proyecto democrático en su dimensión más profunda. Fortalecer las instituciones, proteger los derechos humanos y fomentar el diálogo plural no son tareas técnicas, sino apuestas culturales que, en última instancia, definen el horizonte político de nuestra época y nos permiten disipar las sombras autocráticas.

48

La transición democrática en América del Sur: de la movilización a la frustración

La transición democrática en América del Sur, consolidada a partir de la segunda mitad del siglo XX, implicó mucho más que una simple alternancia institucional: supuso una reconfiguración profunda del orden sociopolítico, impulsada por la acción colectiva de sectores históricamente excluidos. A través de movilizaciones masivas, diversos actores sociales deterioraron las bases de los regímenes militares autocráticos, abriendo paso a



nuevas formas de legitimidad política y a una redistribución del poder simbólico y material. Movimientos sociales de distinta índole canalizaron demandas largamente postergadas, articulando reivindicaciones que abarcaron desde la igualdad de género y el reconocimiento étnico hasta la justicia laboral y la ampliación de derechos políticos.

Organizaciones emblemáticas como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina (1977), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil (1984), la Central Obrera Boliviana (1952) y la Conferencia Mapuche en Chile (1970) encarnaron una vitalidad sociopolítica que desafió el monopolio Estatal de la represión, transformando el espacio público en un escenario de resistencia, memoria y construcción democrática. Estas experiencias colectivas no solo visibilizaron demandas históricamente postergadas, sino que también reconfiguraron el vínculo entre sociedad civil y poder institucional. En paralelo, acciones disruptivas como la huelga general de 1982 en Bolivia, que paralizó el país, evidenciaron el agotamiento del modelo autocrático y demostraron la capacidad de la movilización popular para alterar el curso político, disputar la legitimidad del régimen y redefinir los marcos de la ciudadanía activa.

49

En paralelo, los partidos políticos desempeñaron un papel estratégico en la confrontación contra las autocracias. Agrupaciones como Acción Democrática (AD) en Venezuela y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú fueron actores clave en momentos de inflexión, como el levantamiento del 23 de enero de 1958 en Caracas y la negociación para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Lima en 1978. La sinergia entre actores sociales y políticos fue fundamental para construir legitimidad, sostener el ímpetu democratizador y evitar la fragmentación del proceso.

La convergencia de estas fuerzas propició un reordenamiento institucional profundo, haciendo de la transición un proceso irreversible entre 1958 y 1990. Este giro generó tensiones en la política exterior de EE.UU., cuya alianza histórica con regímenes autocráticos—respaldada por la Doctrina de Seguridad Nacional en el contexto de la Guerra Fría—entró en contradicción con la nueva realidad sudamericana. Ante la presión interna y externa, Washington se vio forzado a revisar sus posturas estratégicas, optando por una «promoción discreta de la democracia». Un ejemplo de este enfoque se encuentra



en la correspondencia entre el Departamento de Estado y su Embajada en Ecuador, que reconocía abiertamente que «un retorno al gobierno civil en Ecuador sirve a nuestros intereses» .

A pesar de los avances, la transición enfrentó resistencias significativas. En el ámbito militar, las FF.AA., acostumbradas a un rol hegemónico, se mostraron reticentes a ceder el poder. En Ecuador, el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) se opuso abiertamente a la candidatura de Abdalá Bucaram , mientras que, en Perú, el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) dejó claro que el cambio era «de gobierno, no de poder», subrayando que «en este momento, el poder lo tiene la Fuerzas Armadas» .

Estas tensiones no se limitaban al ámbito castrense. En el plano civil, el proceso democratizador se expresó en la coexistencia de dos ambiciones legítimas: el respeto a las libertades civiles, eje fundamental del nuevo orden, y la aspiración de mejorar las condiciones de vida de la población. Ambas dimensiones convivieron en el imaginario político de la época, aunque no siempre con igual intensidad. Esta tensión se ilustra en la Carta Pastoral de Monseñor Rafael Arias Blanco en Venezuela, quien denunció el régimen autoritario de Marcos Pérez Jiménez (1950-1958) desde la perspectiva de la desigualdad social: «Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez...la producción per cápita...ha subido al índice de \$540,00. Ahora bien, nadie osará afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos» .

Desde este panorama, el proyecto democratizador en América del Sur fue articulado por sus actores sociales en torno a tres dimensiones interdependientes, orientadas a configurar una sociedad democrática poliárquica. En primer lugar, la dimensión institucional buscaba establecer normas y mecanismos que garantizaran la competencia electoral, la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. En segundo lugar, la dimensión social aspiraba a mejorar las condiciones de vida de la población mediante políticas inclusivas que redujeran la desigualdad y fortalecieran la cohesión social. En esencia, esta dimensión encarnaba la búsqueda de la justicia social como principio ordenador. Finalmente, la dimensión cultural promovía una cultura política participativa,



basada en el respeto a los derechos humanos, el pluralismo ideológico y la deliberación ciudadana.

El desarrollo de estas dimensiones se realizó en un escenario complejo, configurado por cuatro procesos estructurales claves que moldearon sus alcances y contradicciones:

Crisis socioeconómica: hacia 1985, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) evidenciaban desafíos estructurales profundos. La pobreza se había generalizado: mientras Argentina y Uruguay registraban tasas del 22% y 20% respectivamente, países andinos como Bolivia (70.5%) y Perú (60%) enfrentaban niveles alarmantes. Esta precariedad se manifestaba también en indicadores como el desempleo urbano —14.3% en Venezuela y 14% en Colombia— y el analfabetismo, que alcanzaba el 27.5% en Bolivia y el 20% en Brasil.

Deuda externa y fuga de capitales: la crisis económica de los años ochenta, conocida como la «década perdida», profundizó la vulnerabilidad financiera de la región. El caso venezolano resulta paradigmático, en 1987, el país acumulaba una deuda externa de 36 mil millones de dólares, mientras que sus ciudadanos —principalmente sectores privilegiados— mantenían cerca de 50 mil millones en cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza. Esta asimetría evidenciaba una desconexión estructural entre la riqueza de las élites y la sostenibilidad fiscal del Estado.

Reformulación de los objetivos de los movimientos indígenas: a diferencia de las exigencias del siglo XX, los pueblos indígenas no buscaron desintegrarse del Estado-nación, sino integrarse desde una perspectiva pluralista, disputando electoralmente espacios institucionales y creando sus propios partidos, como el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik en Ecuador (1995).

La persistencia de agrupaciones guerrilleras: surgidas de partidos comunistas, estas organizaciones emprendieron una lucha armada contra los Estados democráticos, con la población civil como principal víctima. Un ejemplo trágico fue el asesinato del sacerdote Víctor Acuña por la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú, el 3 de diciembre de 1987.



A pesar de los avances sociopolíticos reflejados en la celebración de elecciones competitivas, las democracias sudamericanas enfrentan desafíos persistentes en el siglo XXI. Ya en 2004, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advertía sobre una tensión latente: amplios sectores de la población priorizan el crecimiento económico por encima de los principios democráticos. Esta disociación entre expectativas materiales y valores institucionales se traduce en un profundo malestar ciudadano, como lo evidencian las encuestas de Latinobarómetro, que registraron niveles de satisfacción democrática inferiores al 21% entre 1996 y 2004.

Este desencanto no solo se manifiesta en el ámbito político, sino que permea el imaginario cultural. Un ejemplo elocuente es la canción *Políticos Paralíticos* del grupo venezolano Desorden Público, cuyo provocador coro —«yo quisiera que los políticos fueran ¡fueran! paralíticos»— condensa el rechazo popular frente a la corrupción, la impunidad y la sensación de abandono por parte de las élites gobernantes.

La fragilidad democrática en América del Sur hunde sus raíces en la incapacidad de su sociedad para materializar los objetivos del proyecto democratizador, siendo la persistente desigualdad socioeconómica uno de sus factores más determinantes. En Brasil, el coeficiente de Gini alcanzó 0.53 en 2023, y en Colombia, el 10% más rico concentra cerca del 40% del ingreso nacional. A esta desigualdad estructural se suma la debilidad institucional. Aunque sus países funcionan como poliarquías, la precariedad de sus instituciones deteriora la confianza ciudadana y da lugar a democracias de baja institucionalidad, vulnerables al autoritarismo y la corrupción. Ejemplos como el gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador (2003-2005), que vulneró la independencia judicial, o el de Alejandro Toledo en Perú (2001-2006), marcado por escándalos de corrupción, ilustran esta deriva institucional.

En este contexto, también han proliferado las llamadas democracias imperfectas: regímenes que cumplen con los requisitos formales de la democracia, pero presentan deficiencias sustantivas. A diferencia de las democracias de baja institucionalidad —donde las instituciones son funcionalmente débiles—, en las imperfectas estas operan de forma limitada y selectiva. La manifestación más recurrente en la región es el régimen delegativo,



caracterizado por la concentración de poder en un presidente que se presenta como el «salvador de la nación», manipulando las elecciones competitivas como un mecanismo de cesión acrítica de las atribuciones ciudadanas al gobernante. Este fenómeno ha adoptado dos formas principales: la democracia delegativa y el liderazgo delegativo.

El primer gobierno de Alan García en Perú (1985-1990) es un ejemplo de democracia delegativa. Su gestión configuró un Estado subordinado a la lógica de la confrontación política, lo que derivó en un ejercicio discrecional del poder. Esta dinámica se expresó de forma emblemática en la Estatización de la banca, decretada sin aprobación parlamentaria, y justificada mediante la construcción de enemigos simbólicos —como la banca nacional e internacional— que permitieron legitimar la concentración de atribuciones en el Ejecutivo. Sin embargo, el enfoque intervencionista de García desembocó en una crisis inflacionaria sin precedentes: en 1990, Perú registró una hiperinflación superior al 7000%.

El liderazgo delegativo, como se vio en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1993), surge también como respuesta a una crisis de gobernabilidad. Bajo este modelo, típicamente conducido por tecnócratas, se privilegia una gestión Estatal desvinculada del conflicto político y de la deliberación democrática. En medio de una aguda crisis socioeconómica, Pérez impulsó el «Gran Viraje», un giro radical hacia políticas de ajuste estructural, implementado sin construir consensos políticos ni sociales. Esta desconexión entre decisión gubernamental y legitimidad participativa generó un profundo malestar ciudadano, que se expresó de forma dramática en el Caracazo: una protesta masiva contra el alza de precios, que culminó en una represión con saldo de cientos de muertes.

En resumen, la transición democrática en América del Sur constituyó un proceso de reconfiguración estructural, impulsado por la movilización popular y el anhelo de construir un nuevo orden político pluralista. No obstante, ese ímpetu se vio rápidamente deteriorado por la fragilidad institucional, la persistencia de desigualdades estructurales y la incapacidad de los partidos para canalizar las demandas ciudadanas. Estos factores menoscabaron la legitimidad democrática y facilitaron el surgimiento de regímenes delegativos, en los que la participación fue sustituida por una lógica de subordinación



vertical. En este contexto, emergió una cultura política participativa delegativa caracterizada por la cesión de las funciones ciudadanas al liderazgo personalista. La promesa de justicia social, núcleo simbólico de las aspiraciones transicionales, se transformó en una arquitectura de poder centralizado. Así, la crisis democrática no constituyó una anomalía coyuntural, sino la concreción de un proceso histórico de antipatía progresiva y desgaste de la ciudadanía activa.

Carisma, crisis y refundación: el liderazgo político en la era del desencanto democrático

Desde finales del siglo XX América del Sur experimentó una profunda erosión de la legitimidad democrática. La promesa de justicia social se desvaneció frente a la persistente desigualdad, la fragilidad institucional y el debilitamiento de los canales de representación política. Este deterioro propició un giro valorativo: la democracia perdió su halo de solución para alcanzar la equidad, dando paso a un desencanto ciudadano que socavó la confianza en las instituciones. Este clima catalizó masivas protestas populares que cuestionaron abiertamente la legitimidad de los gobiernos, demostrando la fragilidad de un sistema que, lejos de romperse de forma abrupta, se desgastaba desde sus cimientos.

54

En Bolivia, la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) en octubre de 2003 fue el clímax de una crisis social agudizada por la Guerra del Gas. Las movilizaciones populares desbordaron los cauces institucionales, forzando su renuncia y posterior exilio a EE.UU. Un escenario similar se vivió en Argentina, donde el colapso económico de 2001 —precedido por una prolongada recesión, desempleo masivo y el célebre «corralito» que restringió el acceso a los ahorros bancarios— desembocó en un estado de sitio decretado por el presidente Fernando de la Rúa (1999-2001). La medida intensificó las movilizaciones que exigían la renuncia de toda la clase política, culminando con su dimisión el 20 de diciembre y su emblemática salida en helicóptero desde la Casa Rosada.



Si bien los casos de Bolivia y Argentina evidenciaron la capacidad de la sociedad civil para desafiar a los gobiernos, en otras naciones el quiebre de la legitimidad se manifestó en la anuencia o pasividad ciudadana frente a rupturas del orden constitucional. En Perú, el autogolpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 no generó un rechazo masivo, sino que obtuvo un amplio respaldo popular, consolidado en su reelección en 1995 con el 64.42% de los votos. En Ecuador, el intento de golpe del 21 de enero de 2000 —liderado por el coronel Lucio Gutiérrez y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)— emergió en medio de una aguda crisis económica. Aunque la acción fue rápidamente neutralizada, contó con el respaldo de amplios sectores empobrecidos que la percibían como una vía legítima para enfrentar el colapso institucional. Ese apoyo se transformó en capital político para Gutiérrez, quien ganó las elecciones de 2002 con el 54.79%.

En Venezuela, el desenlace institucional tomó un rumbo distinto. La salida del poder no se produjo mediante una insurrección popular o militar, sino a través de un proceso institucional en un contexto de profunda crisis de legitimidad. La destitución de Pérez en 1993 fue resultado de un juicio político por malversación de fondos públicos. Aunque no hubo una movilización masiva en las calles, el entorno social era igualmente convulso, marcado por el Caracazo de 1989 y los intentos de golpe de Estado en 1992. En este caso, la crisis social legitimó la resolución institucional del conflicto, convirtiendo a Pérez en el primer presidente venezolano destituido por el Congreso.

El clima de tensión en torno a la legitimidad de los regímenes democráticos favoreció el surgimiento de una nueva generación de líderes que reconfiguró el escenario político sudamericano. Figuras como Néstor Kirchner (2003-2007), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Evo Morales (2006-2019), Rafael Correa (2007-2017), Hugo Chávez (1999-2013), Álvaro Uribe (2002-2010) y Alberto Fujimori (1990-2000) canalizaron el malestar social mediante procesos electorales que legitimaron su ascenso. Una vez en el poder, consolidaron estilos de liderazgo delegativos, marcados por una alta concentración de atribuciones en la figura presidencial y una redefinición del vínculo entre gobernante y ciudadanía.



Aunque compartían rasgos delegativos, sus trayectorias fueron profundamente heterogéneas. Morales, Correa, Chávez, Uribe y Fujimori promovieron reformas que socavaron los principios democráticos, dando lugar a democracias delegativas híbridas inscritas en la lógica del autoritarismo competitivo. Sus estrategias consistieron en debilitar gradualmente las instituciones republicanas, sustituyéndolas por mecanismos de control más centralizados, volátiles y dependientes del liderazgo personalista. En última instancia, sus acciones tendieron a asegurar la prolongación indefinida en el poder, consolidando una cultura política de participación subordinada. En contraste, Kirchner y Lula mantuvieron un mayor apego al orden constitucional, respetando procesos de alternancia y mecanismos de control, lo que configuró democracias imperfectas de tipo delegativo. Aunque hubo una concentración de poder, sus acciones no llegaron a una institucionalización autocrática.

Ambos modelos de gobierno se legitimaron a través de discursos políticos que funcionaron como pilares simbólicos de sus respectivos regímenes. Morales, Correa, Chávez, Kirchner y Lula articularon narrativas nacionalistas y antineoliberales que apelaban al resentimiento social desde una perspectiva de globalismo progresista.

56

Este relato, según Boaventura de Sousa Santos, se estructura en dos grandes corrientes. La primera, denominada capitalismo y colonialismo sin fin, describe una izquierda que asume ambos sistemas como inevitables y se orienta a mitigar sus efectos sociales, buscando un equilibrio entre principios individualistas y comunitarios. En esta visión, el mestizaje se concibe como vía de superación del colonialismo, priorizando la lucha de clases por encima de las identidades étnicas. La segunda corriente, llamada fin del capitalismo y del colonialismo, propone una superación radical de ambos sistemas mediante la exploración de alternativas poscapitalistas y precapitalistas. Considera el colonialismo como una estructura social profunda, por lo que plantea la necesidad de articular las luchas anticapitalistas con las anticoloniales, en una clave de transformación civilizatoria que reimagina el horizonte político desde las epistemologías del Sur.

La narrativa del capitalismo y colonialismo sin fin operó como horizonte interpretativo para Kirchner y Lula, quienes construyeron discursos polarizadores que se



erigieron en pilares simbólicos de sus respectivas democracias delegativas. Ambos denunciaron las profundas desigualdades estructurales de sus países, responsabilizando a las élites gobernantes y a las políticas neoliberales por la exclusión social. Kirchner, en su discurso de investidura, sintetizó esta postura al proclamar: «Venimos desde el Sur del mundo...Sabemos adónde vamos y adónde no queremos volver» . Lula, por su parte, denunció el agotamiento de un modelo excluyente y la cultura del individualismo, percibida como una amenaza a la cohesión social y a la solidaridad nacional .

Pese a sus afinidades ideológicas, sus estrategias de gobernabilidad divergieron de forma significativa. Frente a una minoría legislativa, Kirchner optó por concentrar poder en el Ejecutivo mediante el uso intensivo de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando así la negociación parlamentaria. Durante su primer año de gestión, firmó más de 150 DNU —una cifra sin precedentes— que le permitieron implementar medidas de alto impacto, como la reestatización del Correo Argentino y la ampliación de programas sociales, entre ellos el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Este estilo de liderazgo se expresó también en la reforma de la Corte Suprema de Justicia en 2003, cuando, respaldado por una fuerte legitimidad popular, impulsó el juicio político a sus miembros, logrando su renuncia y la posterior designación de nuevos jueces. Esta intervención sobre otro poder del Estado reforzó la idea de un Ejecutivo capaz de «limpiar» las instituciones, legitimando su centralidad decisional.

Lula, enfrentando también una minoría parlamentaria, adoptó una lógica de coalición sustentada en la distribución de cargos y concesiones programáticas, lo que facilitó la creación de iniciativas como Bolsa Familia y la expansión del crédito público. Esta estrategia, sin embargo, expuso al gobierno a tensiones éticas, especialmente tras el escándalo del mensalão en 2005, cuando se reveló un esquema de pagos a legisladores a cambio de apoyo político. Un ejemplo de su accionar delegativo fue la Reforma Previsional de 2003, impulsada desde el Ejecutivo mediante una Propuesta de Enmienda Constitucional. La medida, que implicó recortes a beneficios del sector público, generó una fuerte resistencia interna dentro del Partido de los Trabajadores y de sindicatos aliados. No obstante, Lula logró imponer disciplina partidaria y justificar la reforma apelando a su



legitimidad popular, desplazando el debate institucional hacia una lógica de liderazgo personal.

En el plano económico y de política exterior, buscaron renegociar la inserción internacional de sus países. Kirchner adoptó una postura de autonomía pragmática al cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2006, en un contexto de crecimiento económico sostenido —cerca al 9% anual entre 2003 y 2007—, lo que reforzó su legitimidad interna. Lula promovió la cooperación Sur-Sur y asumió un rol protagónico en la conformación de los BRICS, proyectando a Brasil como potencia emergente. En ambos casos, el desempeño económico y los avances sociales se constituyeron en pilares de legitimación, reforzando la centralidad presidencial como motor del desarrollo nacional.

Ambos líderes construyeron figuras carismáticas que trascendieron sus atribuciones formales, capitalizando sus trayectorias personales como activos simbólicos. Kirchner se posicionó como un presidente sin compromisos con las élites, fomentando una imagen de cercanía con el pueblo. Lula, como el «hijo del Brasil» que superó la pobreza y lideró huelgas históricas, se erigió en un referente moral y político para amplios sectores populares. Esta personalización del poder se tradujo en una fuerte centralidad decisional y en sus roles como voceros directos de las políticas públicas, estableciendo una conexión emocional que operó dentro de un marco donde la alternancia y el sistema de partidos eran funcionales.

La noción del fin del capitalismo y del colonialismo se erigió como eje ideológico de los proyectos políticos de Chávez, Morales y Correa. Esta narrativa reconfiguró la crisis de sus naciones, no como una coyuntura transitoria, sino como la manifestación del agotamiento estructural del modelo democrático vigente. Desde esta perspectiva, legitimaron discursos orientados a erosionar el orden institucional vigente, denunciando la democracia como un engranaje funcional a un sistema decadente. Morales la equiparó al apartheid sudafricano ; Correa defendió la subordinación de los representantes al mandato popular ; y Chávez la calificó como una tiranía que empobrecía al pueblo .



Este diagnóstico compartido se sustentó en una relectura crítica de la historia republicana, que interpretaba la independencia como una continuidad del orden colonial bajo nuevas formas de dominación. Chávez denunció que la emancipación derivó en un control oligárquico y en el saqueo petrolero por parte de EE.UU. ; Morales introdujo el concepto de colonialismo interno para visibilizar la exclusión sistemática de los pueblos originarios ; y Correa calificó la República como una gran mentira, acusando a las élites de alinearse con el Consenso de Washington .

Una vez establecida la naturaleza estructural de la crisis, el discurso se desplazó hacia una crítica sistemática al capitalismo, concebido como antagonista ético y político. Chávez lo definió como combustible para incendios ; Correa lo acusó de fomentar el individualismo ; y Morales lo señaló como promotor de la ganancia sin límites . En esta narrativa, el capitalismo no era solo un sistema económico fallido, sino una matriz cultural que debía ser desmantelada para habilitar un nuevo horizonte civilizatorio.

Sobre esta base crítica, emergió la propuesta del Socialismo del Siglo XXI como una alternativa sistémica. Chávez lo concibió como una creación autóctona inspirada en Marx y Lenin ; Correa lo definió como el socialismo del buen vivir, centrado en la justicia y la equidad ; y Morales lo interpretó como una democracia de movimientos sociales . Aunque divergentes en sus formulaciones, las tres propuestas compartían la voluntad de superar los límites del modelo democrático vigente, promoviendo un paradigma fundado en la participación popular, la soberanía nacional y la justicia social.

La legitimación de este nuevo horizonte político trascendió el plano programático. Cada dirigente construyó una figura simbólica que condensaba las aspiraciones populares y reforzaba su rol como agente de transformación, articulando una legitimidad de carácter mesiánico. Chávez se presentó como un soldado del pueblo, resignificando su fallido golpe de Estado de 1992 como una rebelión inevitable; Morales como un cocalero indígena que encarnaba 500 años de resistencia; y Correa como un economista honesto y competente, líder de una revolución ciudadana. Estas identidades permitieron articular una conexión emocional con los sectores que se sentían excluidos, consolidando una narrativa de



redención política y creando un fuerte sentido de pertenencia a un proyecto que buscaba restaurar la dignidad.

La institucionalización de estos liderazgos se afianzó mediante mecanismos de participación directa, especialmente el referéndum, transformado de herramienta consultiva en acto fundacional. En Venezuela, el de 1999 fue presentado como una segunda independencia ; en Bolivia, el de 2009 como el momento en que, por primera vez, el pueblo decidía su destino ; y en Ecuador, el de 2008 como la promesa del buen vivir .

Tres rasgos estructurales redefinieron el papel del referéndum en este nuevo esquema político. El primero fue la desarticulación del marco jurídico preexistente, mediante la invocación de una voluntad popular que justificaba la ruptura del orden constitucional. En Ecuador, en enero de 2007, Correa modificó unilateralmente el estatuto aprobado por el Congreso para convocar a la Asamblea Constituyente, estableciendo un precedente que colocaba la voluntad del Ejecutivo por encima de la normativa vigente.

El segundo rasgo consistió en el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El referéndum dejó de ser un mecanismo de deliberación para convertirse en un plebiscito orientado a anular los poderes Legislativo y Judicial. En Venezuela, el de 1999 permitió a Chávez eludir la oposición parlamentaria, legitimando una Asamblea Constituyente que socavó sistemáticamente la independencia de los Poderes Públicos.

El tercer elemento fue la resignificación del acto electoral, que pasó de ser una consulta ciudadana a convertirse en un ritual de movilización social. Bajo esta lógica, el pueblo dejó de ser un mero elector para convertirse en agente de cambio histórico, con la capacidad de refundar la nación. En Bolivia, Morales presentó el referéndum constitucional de 2009 como un momento de reparación histórica para el Estado Plurinacional.

A medida que se consolidaba la hegemonía de estos liderazgos, emergieron tensiones entre participación y pluralismo. Una de las más significativas fue la deslegitimación activa de los resultados electorales adversos. En Bolivia, tras el referéndum de 2016 que rechazó la reelección, Morales atribuyó la derrota a una «guerra sucia» y afirmó que «ganó la mentira» , postulándose nuevamente a pesar del resultado. Esta lógica de desconocimiento



electoral se articuló con la estigmatización de la disidencia, ejemplificada en Venezuela con la Lista Tascón, una publicación que se convirtió en instrumento de persecución política contra quienes firmaron a favor del referéndum revocatorio contra Chávez en 2004.

A diferencia de los líderes híbridos refundacionales que denunciaron la democracia como una prolongación del colonialismo, los gobiernos de Fujimori y Uribe articularon sus discursos desde una lógica securitista y ordenancista. En lugar de proponer una refundación de la sociedad democrática, plantearon la necesidad de reinstaurar un orden institucional deteriorado por la corrupción, la violencia y la ineficacia Estatal. Esta narrativa de crisis habilitó una posición de excepcionalidad que, en términos de Giorgio Agamben , permitió la suspensión parcial del orden normativo en nombre de la restauración del Estado. Desde esa plataforma, promovieron estrategias de concentración de poder y redefinición institucional, presentadas como indispensables para el restablecimiento del orden público

Uribe describía a Colombia como un «Estado fallido» , mientras Fujimori caracterizaba al Perú como heredero de un «desastre» que exigía una «tarea gigantesca» . Estas representaciones no fueron simples recursos retóricos, sino dispositivos de legitimación que habilitaron el desmantelamiento institucional. La diferencia central entre ambos radicó en el método: Fujimori optó por una ruptura abrupta del orden constitucional mediante el autogolpe del 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso y subordinando al Poder Judicial. Esta acción lo posicionó como outsider frente a la clase política tradicional y lo proyectó como «salvador de la patria». En su discurso de investidura, se dirigió a la ciudadanía como «un presidente como tú» , reforzando una conexión emocional que legitimó sus medidas excepcionales. En su retórica, el progreso nacional requería decisiones extraordinarias y un liderazgo firme capaz de enfrentar amenazas internas con determinación.

El respaldo popular fue decisivo: encuestas de la época registraron un 71 % de aprobación a la disolución del Congreso y un 89 % a la reestructuración del Poder Judicial . Este apoyo permitió instaurar un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Desde entonces, articuló un discurso heroico para justificar la concentración del poder,



manteniendo una fachada de legalidad electoral, como se evidenció en las elecciones de 1995, donde triunfó en primera vuelta y obtuvo mayoría legislativa, resultado reconocido por la Organización de los Estados Americanos.

Su estrategia comunicacional se cimentó en tres pilares discursivos. Primero, construyó la noción de «mi pueblo», como base de apoyo, un concepto inclusivo que abarcaba jóvenes, campesinos, empresarios y profesionales, superando las divisiones partidarias. Segundo, apeló a la necesidad de restaurar la honestidad en el manejo de la cosa pública, en respuesta a la percepción generalizada de corrupción endémica. Su diagnóstico fue severo: las instituciones estaban corroídas por el narcotráfico y los monopolios. Tercero, identificó como causa estructural de la crisis a un sector privilegiado que se había beneficiado a costa de las mayorías, reforzando una narrativa de antagonismo moral entre élites corruptas y ciudadanía honesta.

Sobre esta arquitectura discursiva, consolidó su proyecto político mediante intervenciones estratégicas en cuatro áreas clave. En materia de vivienda, la liberalización económica incentivó las invasiones de tierras, reduciendo la acción estatal a la titulación de predios, como evidencia el caso de Chancherías. Lejos de resolver el déficit habitacional, esta política instauró una relación clientelar entre el Estado y los sectores populares. En el plano jurídico, eludió los marcos constitucionales mediante Decretos de Urgencia, reformando pilares como la legislación laboral en 1991 y habilitando, a través de una reforma constitucional, un tercer mandato presidencial. Esta maniobra implicó una intervención directa en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional entre 1996 y 1999, consolidando un modelo de gobernabilidad excepcional bajo apariencia institucional.

Aunque comparte con Fujimori una orientación restauradora, el liderazgo de Uribe se distingue por una retórica que, en el plano discursivo, reivindicaba la institucionalidad democrática. Sin embargo, esa defensa formal se vio comprometida por decisiones concretas, como la reforma constitucional del Acto Legislativo 02 de 2004, que habilitó su reelección en 2006. El proceso estuvo marcado por el escándalo de la «Yidispolítica», en el que se reveló que funcionarios del Ejecutivo ofrecieron beneficios —como cargos públicos y



notarías— a congresistas para asegurar los votos necesarios, evidenciando una instrumentalización del aparato Estatal para fines personales.

Uribe cimentó su proyecto político en la premisa de que el problema estructural de Colombia no era la acción Estatal, sino su ausencia. «Hemos creído tener un gran Estado protector, pero lo que en realidad hemos padecido es tener un gran fantasma», afirmaba. Esta perspectiva le permitió canalizar el malestar social, presentándose como un líder austero, ajeno a las élites tradicionales, lo que consolidó una conexión directa con la población. Su figura se erigió como la de un «hacedor de patria»: un hacendado investido con el mandato simbólico de «42 millones de colombianos dignos, trabajadores, democráticos».

Esa conexión personal se convirtió en el fundamento de su política de Seguridad Democrática, articulada en torno a tres ejes: lucha contra la corrupción, recuperación del orden público y reactivación económica y social. Para viabilizar sus propuestas, impulsó una reforma constitucional mediante referéndum, que incluía la reducción del número de congresistas como vía para construir un Estado más eficiente y directo. Justificó esta iniciativa apelando a la «revolución de las comunicaciones», que —según su visión— permitiría un poder legislativo más ágil y sometido al escrutinio permanente de la opinión pública. Argumentó que la independencia frente al Ejecutivo no dependía de la cantidad de legisladores, sino de su conexión con la ciudadanía.

Aunque el referéndum fue rechazado, el episodio reveló un estilo de liderazgo marcado por la tensión entre las instituciones representativas y la apelación directa al pueblo. Pese a su lema de «Gobierno de Leyes», Uribe mostró disposición a presionar al Congreso, llegando incluso a amenazar con solicitar su revocatoria si no se aprobaba la totalidad de la reforma. Posteriormente, retomó el diálogo institucional, reconociendo la necesidad de articular consensos partidarios para avanzar en su agenda.

La centralización del poder se expresó también en los consejos comunales de gobierno, un mecanismo que desplazó a las instancias tradicionales de intermediación política, como los alcaldes. Estos encuentros periódicos entre el presidente y comunidades locales abordaban problemáticas específicas y anunciaban soluciones inmediatas, muchas



veces al margen de los canales institucionales. En la práctica, funcionaban como espacios de interlocución directa entre el Ejecutivo y la ciudadanía, reforzando la imagen de un presidente accesible, resolutivo y comprometido con las demandas populares. Esta modalidad debilitó el rol de los actores políticos intermedios y consolidó una narrativa de gobernabilidad basada en la cercanía emocional y la eficacia ejecutiva, privilegiando la acción inmediata sobre el debate deliberativo.

En síntesis, la crisis de legitimidad democrática que atravesó América del Sur a finales del siglo XX no representó un mero colapso institucional, sino que operó como catalizador de nuevas formas de liderazgo. El deterioro de la representatividad fue capitalizado por una generación de mandatarios que, lejos de restaurar el equilibrio republicano, consolidaron su autoridad mediante el carisma personal y una interlocución directa con la ciudadanía. A través de narrativas refundacionales o restauradoras, no solo ocuparon el espacio simbólicamente vaciado por las democracias debilitadas, sino que reconfiguraron su fragilidad en una plataforma para la emergencia de modelos de autoritarismo competitivo. Esta transformación dejó huellas profundas en el orden político regional, alterando las fronteras entre representación, legitimidad y concentración del poder.

64

Conclusión

La trayectoria analítica de este estudio ha permitido desentrañar las transformaciones estructurales que han marcado el tránsito político de América del Sur entre los siglos XX y XXI. Lejos de ser un colapso abrupto, la ruptura democrática se revela como una metamorfosis progresiva del sistema político, incubada en las tensiones históricas entre promesas de justicia social y persistentes dinámicas de desigualdad y fragilidad institucional. Esta tensión ha generado un vacío de legitimidad que ha sido instrumentalizado por nuevos liderazgos, capaces de convertir el desencanto ciudadano en capital político.



En este escenario, la democracia regional ha derivado hacia formas delegativas que se articulan en dos configuraciones predominantes. Por un lado, las democracias imperfectas —en la línea de la democracia delegativa propuesta por O'Donnell— concentran el poder sin dismantelar por completo los contrapesos institucionales, como se observa en los gobiernos de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva. Por otro, los autoritarismos competitivos se apoyan en formas híbridas de democracia delegativa, donde la legitimidad electoral coexiste con una erosión sistemática de los principios republicanos. Los liderazgos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa encarnan un modelo refundacional que, bajo la retórica nacionalista y antineoliberal, busca la transformación radical del orden institucional; mientras que Alberto Fujimori y Álvaro Uribe representan un modelo restaurador que, desde la retórica del orden y la seguridad, reconfigura el poder en el Ejecutivo.

Aunque sus narrativas y orientaciones ideológicas difieren, ambos modelos —el refundacional y el restaurador— comparten una arquitectura de poder centrada en el liderazgo personalista, que desplaza los mecanismos de deliberación plural hacia formas de representación unidireccional. Esta convergencia revela una tendencia estructural: el debilitamiento de la institucionalidad republicana en favor de esquemas de mando concentrado, donde la figura del líder absorbe la legitimidad ciudadana y redefine el vínculo político en términos de obediencia antes que de participación.

Más allá de las dimensiones político-institucionales, la crisis democrática en América del Sur debe ser comprendida como una crisis cultural y simbólica. La personalización del poder y la consecuente subordinación de la ciudadanía han desplazado al sujeto político desde su rol deliberativo hacia una función legitimadora pasiva. Esta mutación demanda una revisión crítica de la cultura política regional, que reconozca la democracia no como un mero conjunto de reglas procedimentales, sino como un *habitus* —en el sentido bourdiano— sustentado en el diálogo, el pluralismo y el respeto mutuo.

En este tránsito histórico —de la promesa democrática a la autocratización— se configura un nuevo paradigma de representación centrado en la figura del líder, que redefine las relaciones entre poder y ciudadanía. Fortalecer la democracia en América del



Sur exige, por tanto, una tarea de largo aliento: reconstruir un lenguaje político común, restituir al ciudadano su función deliberativa y reimaginar la deliberación como práctica constitutiva de lo democrático. En un contexto marcado por la tentación autoritaria, esta reconfiguración cultural se presenta como condición necesaria para la revitalización de la sociedad democrática en el continente.

